

Seguridad económica y pobreza en la vejez: tensiones, expresiones y desafíos para el diseño de políticas

Sandra Huenchuan¹
José Miguel Guzmán¹

Resumen

El presente artículo sobre la seguridad económica en la vejez tiene como objetivos proponer un acercamiento conceptual para el análisis del tema; estudiar la situación de las personas mayores en lo que respecta a la seguridad de ingresos y examinar las políticas y programas aplicados en algunos países de la región. El esquema conceptual de análisis propuesto abarca factores generacionales, individuales y de los sistemas de protección social. En el caso de los abordajes programáticos, se persigue sistematizar algunas de intervenciones en materia de seguridad económica que se están realizando en algunos países de América Latina y el Caribe. En las conclusiones del artículo se resalta el papel de la ayuda familiar para lograr cierta seguridad económica en la vejez y el hecho de que la pobreza de las personas mayores es aún un fenómeno extendido. En cuanto a las políticas para mejorar la situación económica en la edad avanzada, se constata que están dirigidas a reducir el riesgo de caer en la pobreza, pero que no garantizan la seguridad de ingresos a este grupo social.

¹ Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL.

Abstract

Economic security and poverty in old age: tensions, expressions and challenges for policymaking

Sandra Huenchuan² - José Miguel Guzmán²

The goals of this article on economic security in old age are to propose a conceptual approach to the analysis of the issue, to study the situation of older persons from the viewpoint of income security and to examine policies and programmes in some of the countries of the region. The proposed conceptual framework for analysis includes generational and individual factors and those relating to social protection systems. The document examines economic security programmes in progress in some of the countries of Latin America and the Caribbean. The conclusions of the article emphasize the role of family assistance in assuring a certain degree of economic security in old age and the fact that poverty among older persons is a still widespread phenomenon. As for policies to improve the economic situation of older persons, it is noted that such policies are designed to reduce the risk of falling into poverty, but that they do not guarantee income security for the members of this group.

Résumé

Sécurité économique et pauvreté dans la vieillesse : tensions, expressions et enjeux pour l'élaboration des politiques

Sandra Huenchuan³ - José Miguel Guzmán³

Cet article sur la sécurité économique dans la vieillesse a pour objectifs de fournir une approche conceptuelle pour l'analyse du thème; d'étudier la situation des personnes âgées au regard de la sécurité des revenus et d'examiner les politiques et les programmes mis en œuvre dans certains pays de la région. Le schéma conceptuel d'analyse proposé utilise des facteurs générationnels, individuels et des systèmes de protection sociale. Les politiques et les programmes sont abordés moyennant la systématisation de certaines interventions en matière de sécurité économique réalisées dans divers pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Dans ses conclusions, l'article souligne le rôle de l'aide familiale pour garantir une relative sécurité économique dans la vieillesse et le fait que la pauvreté dont souffrent les personnes âgées est encore un phénomène très répandu. En ce qui concerne les politiques visant à améliorer la situation économique des personnes du 3^e et 4^e âge, force est de constater qu'elles tendent à réduire le risque de tomber dans la pauvreté, mais ne garantissent pas la sécurité des revenus pour ce groupe social.

² Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE) - Population Division of ECLAC.

³ Centre latino-américain et des Caraïbes de démographie (CELADE) - Division de la Population de la CEPALC.

I. Introducción

El tema de este artículo es la seguridad económica en la vejez, en tanto derecho fundamental reconocido en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en cuanto eje central de un envejecimiento con dignidad y seguridad.

Sus objetivos son: i) proponer un acercamiento conceptual para el análisis de la seguridad económica en la vejez; ii) estudiar la situación económica de las personas mayores, tanto en términos de la seguridad de ingresos como de la pobreza en la edad avanzada y, iii) examinar las opciones en materia de políticas dirigidas a sostener y mejorar la seguridad económica de las personas mayores. El acercamiento conceptual se nutre de las distintas teorías existentes en torno al tema, hasta ahora un cuerpo de conocimientos dispersos que considerados individualmente permiten explicar solamente una dimensión del fenómeno.

En este artículo se unen en una sola propuesta teórico-conceptual los elementos útiles para conocer de manera más integral los factores que determinan la situación económica en la edad avanzada. Se consideran nociones que provienen de la economía del envejecimiento, la sociología de la vejez y las teorías del ciclo vital, para componer una matriz que aclara los factores que concurren al logro de la seguridad de ingresos en la vejez.

El análisis de la situación económica en la vejez se realiza sobre la base de datos disponibles y que permiten un acercamiento a la medición de algunas fuentes de la seguridad económica. En este artículo se presentan indicadores de las fuentes de ingresos de las personas mayores –los niveles de pobreza a escala de personas y de hogares con adultos mayores– que, analizados en su conjunto, brindan una perspectiva de la situación regional.

El tratamiento de las políticas existentes en la materia parte de información sobre los países de la región recopilada por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL y sobre programas aplicados en otras partes del mundo. Cabe hacer notar que la seguridad económica en la vejez es uno de los campos de intervención que ha logrado mayor visibilidad en la agenda pública de los países de América Latina y el Caribe. No obstante, hay aspectos del tema que aún no han sido debidamente incorporados en las agendas de gobierno, y algunas de las medidas adoptadas producen efectos limitados debido a su escasa cobertura.

Del estudio de los temas anteriores se deduce que la seguridad económica en la vejez es un asunto no resuelto en la región, tanto en términos de medición como de intervención. Si bien la población adulta mayor no registra los mismos niveles de pobreza que otros grupos de edad, las diferencias intrageneracionales son marcadas y revelan brechas que no son fáciles de remediar con programas dirigidos exclusivamente a la dimensión de la seguridad económica.

Entre las conclusiones de este artículo se destaca el papel de la ayuda familiar como fuente de seguridad económica y el peligro de descansar únicamente en ella como mecanismo central de protección frente al riesgo de la pobreza en la edad avanzada.

La estructura del artículo es la siguiente. Tras presentar los elementos teórico-conceptuales para el estudio del tema, se analizan algunos indicadores de las fuentes de la seguridad económica y de la pobreza en la edad avanzada en los casos de algunos países de la región. Luego se identifican las opciones en materia de políticas en el tema y sus aspectos clave y, por último, se enumeran las conclusiones del estudio. Se incluye un anexo con los datos sobre el porcentaje de personas en situación de pobreza según grupos de edad y sexo en países seleccionados.

II. Seguridad económica en la vejez: conceptos y definiciones

A. La seguridad económica: el opuesto de la pobreza en la vejez

Disponer de bienes –económicos y no económicos– constituye un elemento clave de la calidad de vida en la vejez. La seguridad económica se define, precisamente, como la capacidad de disponer de forma independiente de una cantidad de recursos económicos regulares y suficientes para garantizar una buena calidad de vida (Guzmán, 2002). Esta permite a las personas mayores satisfacer sus necesidades objetivas, lo que agrega calidad a los años y brinda independencia para la adopción de decisiones. Además, mejora su autoestima, al propiciar el desempeño de roles significativos y la participación en la vida cotidiana como ciudadanos con plenos derechos.

La seguridad económica es el opuesto de la pobreza, pues permite generar condiciones para un envejecimiento con dignidad y seguridad. Esto constituye una legítima aspiración, tanto en el caso de una persona que ha contribuido durante toda su vida a la seguridad social como en el de otra que –porque su trayectoria laboral no lo permitió o por otras razones– no hizo aportes a esta. El envejecimiento digno corresponde al ejercicio de derechos (a la seguridad social, al trabajo y a la protección familiar) de los que todo ciudadano y ciudadana debiera gozar en la última etapa de su vida (Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 1995).

B. Dimensiones para el estudio de la seguridad económica en la edad avanzada

El estudio de la seguridad económica de las personas mayores comprende dos aspectos: i) situación económica y ii) posición económica. La situación económica está determinada por su poder adquisitivo, que puede provenir de diversas fuentes: trabajo, ahorros, jubilación o pensión, entre otras. Se vincula directamente al nivel y tipo de consumo, el cual depende de la edad y el estado de salud de la persona, las características de su residencia y los servicios que corran por cuenta del Estado (servicios gratuitos o subsidios) (CEPAL, 2003).

La particularidad del estudio de la situación económica en la vejez es la insoslayable necesidad de considerar el ciclo vital completo como un elemento subyacente, debido a que el poder adquisitivo tiene que ver con la posición económica anterior y con las decisiones y circunstancias de las personas en otros momentos de su vida (Pérez, 1997).

Algunos autores plantean que la etapa más importante en la determinación de la situación económica en la vejez es el tramo inmediatamente anterior a la jubilación (Maddox y Campbell, 1985). Sin embargo, ciertos datos niegan esta opinión, ya que las etapas anteriores también definen factores relevantes –como el nivel de estudios, la elección de determinada carrera y el número de hijos (Pérez, 1997)– y la jubilación no es un hecho universal, menos aun en el caso de las mujeres.

La posición económica se evalúa a partir de los ingresos o de los bienes de los individuos mayores en relación con otros grupos de edad o la población total. También es importante estudiar las diferencias dentro de la misma generación, básicamente porque en la vejez son más evidentes las desventajas que se acumulan a lo largo de toda una vida. La posición económica de las personas mayores en un momento determinado depende de una compleja combinación de factores interrelacionados y que se presentan esquemáticamente en el gráfico 1. Cabe destacar que el género es una variable estratificadora de importancia, que influye de manera ambigua en la posición económica de las personas cuando llegan a edades avanzadas.

El ciclo vital se refiere al momento de la vida en el que se encuentran los sujetos envejecidos y las personas que los rodean. Incluye a los familiares, pues la interrelación de los ciclos de vida de los diferentes miembros de la familia determina tanto las cargas que deben sobrellevar las personas mayores como las posibilidades de ayuda de las que podrían disponer.

Las biografías personales aluden directamente a la trayectoria laboral de las personas mayores, en lo que respecta a las cotizaciones que hayan acumulado al jubilarse y a su capacidad de empleo en la vejez.

Gráfico 1
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SEGURIDAD ECONÓMICA EN LA VEJEZ



Fuente: Sandra Huenchuan, "Pobreza y redes de apoyo social en la vejez. Acercamiento desde las diferencias de género", *Revista de trabajo social*, N° 12, Escuela Nacional de Trabajo Social, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2006.

Las biografías generacionales corresponden al contexto en que han ido envejeciendo, y se refieren a los factores propios de la historia social, económica y política de las sociedades de las que forman parte.

Las características de los sistemas de protección social se reflejan en las oportunidades y en las amenazas para lograr un ingreso sustituto digno en la edad avanzada y, entre otros aspectos, en la posibilidad de acceder a la atención de la salud.⁴

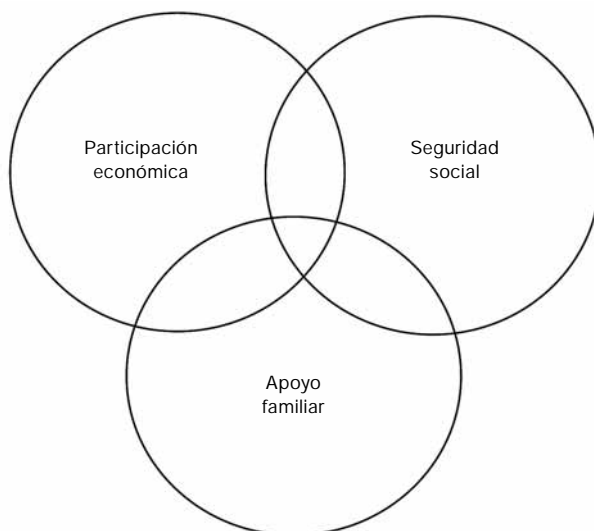
III. Seguridad económica en la vejez: los datos y su interpretación

A. Fuentes de la seguridad económica en la vejez

La participación económica, la seguridad social y los apoyos familiares son los mecanismos que generan seguridad económica para las personas mayores (véase el gráfico 2).

⁴ Adaptado de Pérez (1997).

Gráfico 2
FUENTES DE LA SEGURIDAD ECONÓMICA EN LA VEJEZ



Fuente: Elaboración propia.

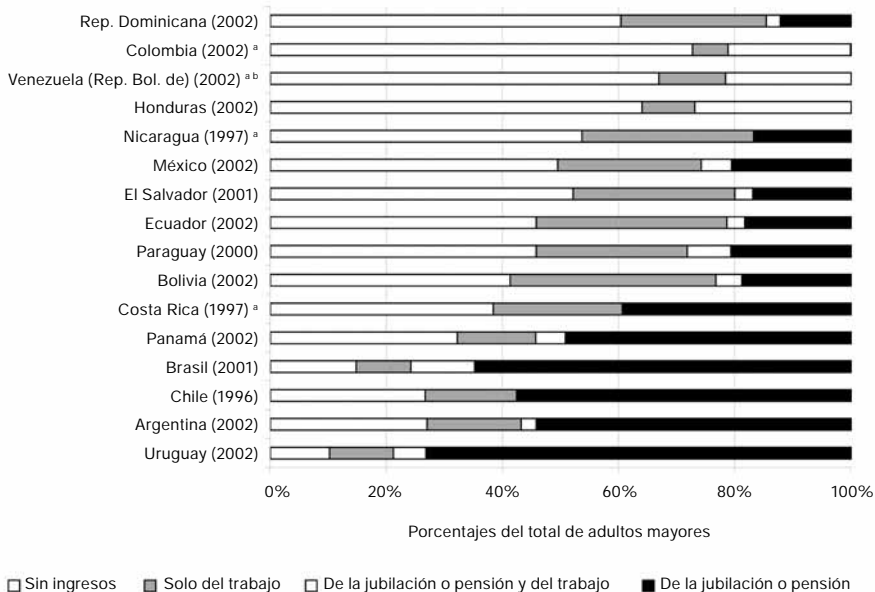
En el gráfico 3 se aprecia la proporción de personas mayores de 60 años que reside en zonas urbanas y percibe recursos de dos de las más importantes fuentes formales de ingresos en la vejez: las jubilaciones y pensiones y el trabajo.

Se observa que solo en cinco países de la región –Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Panamá– el 50% o más de las personas mayores residentes en zonas urbanas recibe ingresos exclusivamente de la seguridad social. Si a ese valor se agregan los que trabajan (reciban o no pagos por concepto de seguridad social), entre poco menos del 30% (Colombia) y casi el 90% (Uruguay) tiene ingresos. En las zonas rurales la cobertura es sensiblemente menor, excepto en el caso de Brasil.

De lo anterior se deduce que, tal como se destaca en CEPAL (2003), la participación laboral de las personas mayores se encuentra directamente relacionada con la deficiente cobertura del sistema de seguridad social, que las obliga a continuar trabajando para subsistir.

Del gráfico 3 también se desprende que, alrededor del año 2000, en más de la mitad de los países, casi un 50% de las personas mayores no recibía ingresos ni del sistema de seguridad social ni del trabajo: su soporte económico recaía en las familias y en las redes sociales. Si estas fallan o son insuficientes, una proporción importante de las personas mayores se encontrará en situación de pobreza.

Gráfico 3
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (16 PAÍSES): FUENTES DE INGRESOS DE LAS PERSONAS MAYORES, ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DE 2000
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos provenientes de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Los ingresos de las jubilaciones y pensiones corresponden al total de ingresos por transferencias de personas que en la variable "condición de actividad" se declaran "jubilados y pensionados".

^b Corresponde al total nacional.

En suma, en la vejez se ponen en práctica mecanismos de diversos tipos para generar seguridad económica. La importancia relativa de cada uno de estos instrumentos cambia de un país a otro según el grado de desarrollo económico e institucional, las características del mercado laboral y la etapa de la transición demográfica.

B. El papel de la ayuda familiar

El papel de la ayuda familiar en la seguridad económica cada vez adquiere mayor reconocimiento, y es relativamente frecuente encontrar ejercicios de cuantificación de este aporte en la composición de ingresos de las personas y los hogares en condición de pobreza. En algunos casos, esta se incluye en las amplias categorías de transferencias familiares o de rentas provenientes de la asistencia privada. En otros se registran como ayudas familiares, y se distingue entre la de los familiares

residentes en el país y la procedente del exterior. En todos los casos, se alude a un contenido similar: aportes en forma de dinero en efectivo a personas que, de no mediar dicha transferencia, estarían en riesgo de caer en la pobreza (Tabor, s/f).

En la vejez, la ayuda familiar adquiere un significado diferente del que tiene en las demás etapas del ciclo de vida, debido a que a esta edad los recursos provienen de fuentes no siempre asimilables a las de las restantes generaciones; a medida que avanza la edad, el ingreso por remuneraciones pierde importancia y –lo que no ocurre en países desarrollados con sistemas de seguridad social más evolucionados– solo una proporción relativamente reducida de la población puede vivir únicamente de los ingresos obtenidos por concepto de jubilación o pensión. Como afirman Wong y Espinoza (2003), el apoyo familiar cobra una mayor importancia relativa en el caso de las personas mayores, sobre todo en el de los grupos de bajos ingresos y que no cuentan con apoyo institucional.

Las transferencias de ingresos remiten al funcionamiento de redes sociales de diversa índole, que proporcionan recursos para satisfacer las necesidades cotidianas de las personas mayores (Salles y Tuirán, 1994). En América Latina y el Caribe, un estudio basado en la encuesta sobre salud, bienestar y envejecimiento (SABE) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en siete ciudades de la región reveló que en Buenos Aires el 59% de las personas mayores entrevistadas recibía ayuda en dinero; en São Paulo, este porcentaje alcanzaba al 61%; en Bridgetown y Montevideo al 65%, y en Santiago, La Habana y México, D.F., superaba el 70% (Saad, 2003).

En un estudio del caso mexicano se demostró que una proporción bastante significativa (alrededor del 30%) de los hogares encabezados por personas mayores de 65 años depende total o parcialmente de las transferencias informales de ingreso (Tuirán y Wong, 1993). En un relevamiento más reciente se concluyó que, en el año 2000, una de las fuentes de ingreso más comunes de las personas mayores en el país era la ayuda familiar (33,7%) y que los que dependían exclusivamente de la ayuda familiar alcanzaban casi al 10% (Wong y Espinoza, 2003). Este dato coincide con los que se desprenden del análisis de los ingresos de las personas mayores de acuerdo con la muestra del XII Censo General de Población y Vivienda de México (2000), que revela que 16% de los hogares con personas mayores (más de 600.000 hogares) reciben ayuda de familiares que residen en el país, y 300.000 reciben aportes de familiares que se encuentran en el extranjero (Hernández, 2001).

Estas cifras, se vinculan con el hecho de que las fuentes de ingreso de las personas y los hogares están directamente relacionadas con el ciclo económico de los hogares (Barquero y Trejos, 2004). El ingreso de los más jóvenes tiende a estar conformado básicamente por remuneraciones salariales; el de las personas que se encuentran en la etapa intermedia del ciclo se compone fundamentalmente de las utilidades obtenidas de la explotación de negocios propios (incluido el trabajo por

cuenta propia), mientras que en el de los individuos que están en la etapa avanzada del ciclo predominan las transferencias (Rubalcava, 2001).

En la medida en que las personas mayores tengan activas sus redes familiares disminuye el riesgo de una reducción simultánea de todas las fuentes de recursos económicos y no económicos, y el riesgo derivado de las fluctuaciones de su disponibilidad se distribuye entre varios agentes. No obstante, debe considerarse que los cambios en los patrones de fecundidad y nupcialidad auguran un futuro –que en algunos países ya es un presente– en el que disminuirá el número de familiares (hermanos, hijos, nietos) con los que la persona mayor puede contar y en el que será cada vez más frecuente que las personas de edad se vean forzadas a depender de ellas mismas para satisfacer sus necesidades (OIT, 2002) e, incluso, hacerse cargo de familiares jóvenes.

En los países en desarrollo, el retiro y la viudez reducen los ingresos ajustados por necesidades y aumentan la probabilidad de pobreza en los hogares con personas mayores. Pero ello no radica solamente en la edad, sino también en las características individuales y sociales ligadas a la historia laboral y la acumulación de activos de las actuales generaciones de edad avanzada.

Sin embargo, en América Latina y el Caribe, los datos sobre pobreza indican que este fenómeno es menos frecuente en la vejez que en otras etapas del ciclo de vida y que, aunque las personas mayores son consideradas un grupo social vulnerable, la incidencia de la pobreza en hogares con personas mayores es menor que en los hogares sin ellas (CEPAL, 2003; del Popolo, 2001; Guzmán, 2002).⁵

Lo anterior tiene directa relación con las transferencias sociales que reciben las personas mayores. Según un ejercicio realizado en Brasil, si no mediaran estas transferencias, la incidencia de la pobreza aumentaría notablemente, sobre todo en las edades más avanzadas (Goldani, 2006). Es más, en varios estudios de la CEPAL se demuestra que los esquemas no contributivos de pensiones pueden tener efectos significativos en la reducción de la pobreza en la vejez y que, contra lo que tradicionalmente se piensa, su costo sería razonable en la mayoría de los países (CEPAL, 2006).

⁵ Es importante reflexionar sobre esta situación. Como afirmó Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, ante la Asamblea Mundial de la Salud en el año 2001, “los pobres se enferman con más frecuencia que las personas en mejor posición económica. Sus niveles generales de salud y bienestar son inferiores. Están más expuestos a las enfermedades contagiosas y tienen menos resistencia a ellas... Tienen menores probabilidades de recuperarse totalmente después de una enfermedad y mueren antes...”. (UNFPA (2002). Cabe preguntarse entonces si la baja presencia de personas mayores en hogares pobres se deberá a que sus miembros mueren antes de llegar a la vejez, vale decir, si –tal como ocurre cuando se analizan países– en los hogares pobres la esperanza de vida es más baja y se reduce la probabilidad de encontrar personas de avanzada edad entre sus miembros.

1. La incidencia de la pobreza a nivel individual

La medición de la pobreza de las personas mayores suele hacerse sobre la base de información que corresponde a los hogares, que no necesariamente refleja la realidad de este grupo social.

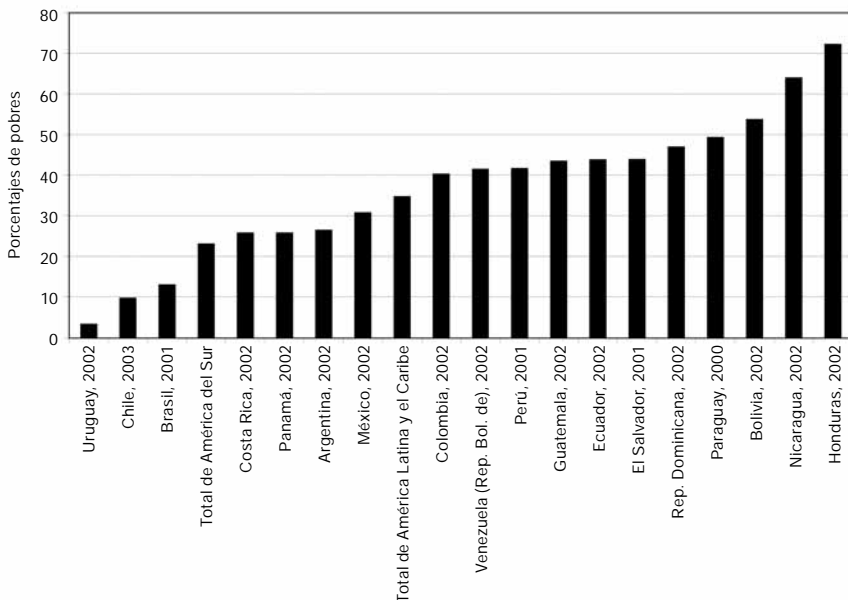
Puesto que una de las dimensiones de la seguridad económica es la autonomía de ingresos –es decir, que las personas mayores cuenten con recursos propios para satisfacer sus necesidades–, resulta conveniente analizar la pobreza a nivel individual con el fin de captar a las personas de edad avanzada que no cuentan con ingresos propios y que, aun viviendo en hogares que no se encuentran en situación de pobreza, carecen de autonomía financiera personal para satisfacer sus necesidades (Rodríguez, 2006).

Ahora bien, en América Latina y el Caribe este tipo de medición es inusual y controvertida. Por lo tanto, las estimaciones de pobreza individual se basan en la clasificación como pobre de todos los residentes de hogares pobres, ya que la pobreza se mide a escala de hogar. Los datos sobre pobreza individual medidos de esta forma permiten afirmar que en la mayoría de los países de la región existen niveles elevados de pobreza en la vejez (véase el gráfico 4).

Si bien es cierto que –con la excepción de los casos de Costa Rica y la República Dominicana– las personas mayores muestran niveles de pobreza más bajos que el total de la población, estos no dejan de ser elevados (véase el anexo 1). Dado que en esta etapa de la vida disminuyen las posibilidades de generación autónoma de ingresos, la pobreza en la vejez supone una mayor vulnerabilidad y condiciones de inseguridad económica que los afectados difícilmente pueden solucionar.

En el gráfico 4 se demuestra que los niveles de pobreza en la vejez varían según los países, pero que en más de la mitad de estos un porcentaje superior al 40% de las personas mayores son pobres. Se estima que alrededor del año 2002, de un total de 43,2 millones de personas mayores, 11,4 millones –el 26,3%– eran pobres. Si se excluyen Brasil y México, que por su alta población influyen significativamente en el promedio regional, este promedio es de un 35%.

Gráfico 4
**AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS):
 INCIDENCIA DE LA POBREZA EN LAS PERSONAS MAYORES, 2001-2003**
(En porcentajes)



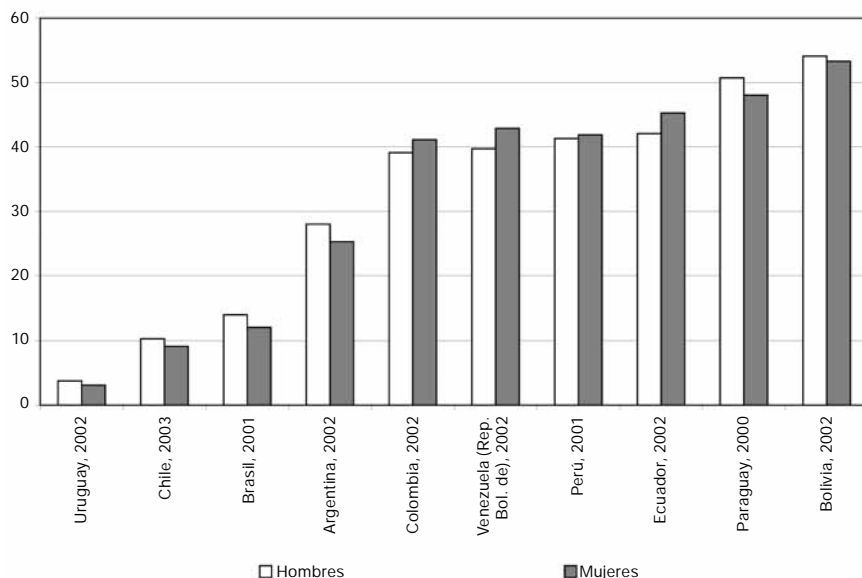
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

Los datos de las encuestas de hogares realizadas en países de América Sur indican que –salvo en los casos de Colombia, Ecuador, Perú y la República Bolivariana de Venezuela– la pobreza individual afecta más a los hombres que a las mujeres (véase el gráfico 5).

Este dato no deja de sorprender, ya que de acuerdo con las encuestas, las mujeres mayores se encuentran en una situación más desventajosa que los hombres en el plano de la seguridad social, a saber: i) un porcentaje más alto de mujeres no percibe ingresos propios; ii) un porcentaje más alto de mujeres no cuenta con pensión ni jubilación, y iii) sus ingresos por concepto de jubilación o pensión son más bajos (Rico, 2003). Al respecto, cabe preguntarse si el hecho de que las mujeres mayores presenten menores niveles de pobreza en algunos países se debe a que reciben ayuda familiar, lo cual compensaría sus limitadas oportunidades de recibir transferencias sociales a través del sistema de seguridad social (Huenchuan, 2006).

En algunos estudios monográficos sobre Argentina, Chile y Puerto Rico se revela que la satisfacción de las necesidades de las mujeres en la vejez depende no solo de su capacidad de pago, sino también de la naturaleza de las redes de apoyo

Gráfico 5
**AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS):
 INCIDENCIA DE LA POBREZA EN LAS PERSONAS
 DE 60 AÑOS Y MÁS, POR SEXO, ALREDEDOR DEL 2000**
(En porcentajes)

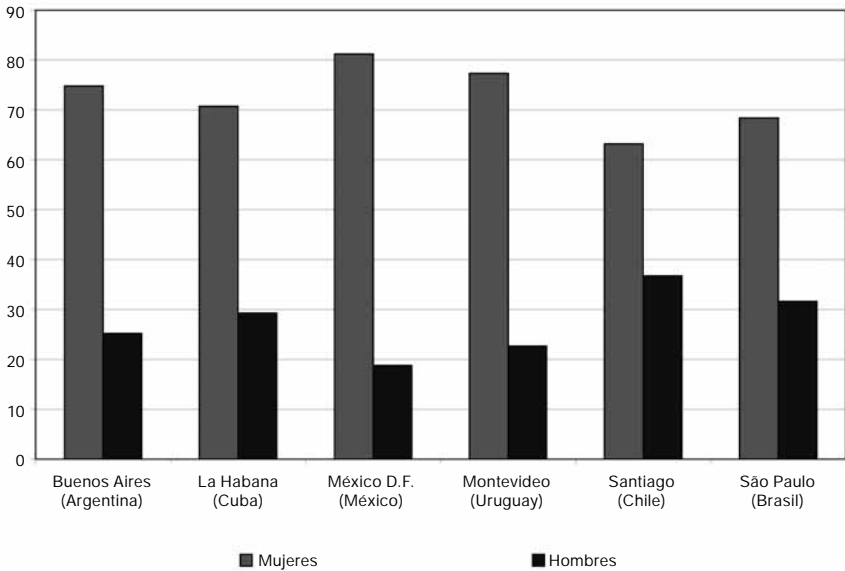


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

en que transcurre esta etapa de la vida (Arias, 2001, Barros, 1994 y Sánchez, 1990). Esto se demostró también en el citado estudio comparativo realizado por Paulo Saad (2003) en siete ciudades de la región sobre la base de la encuesta SABE, del que se desprende que la mayoría de las personas cuyos ingresos provienen principalmente de ayuda familiar son mujeres (véase el gráfico 6).

Lo mismo se corrobora con los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de la República Dominicana (2001), en la que se aprecia que las mujeres mayores reciben más remesas desde el exterior que los hombres (Guzmán, 2004). Este hecho se repite en los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (INEGI, 1994) de México, de la que surge que las mujeres perciben sobre todo transferencias en forma de remesas monetarias, tanto del país (50,6%) como del extranjero (8,0%) (Rubalcava, 2001), y en los datos de la Encuesta Nacional de Empleo de Nicaragua de 2004, que muestra que las remesas constituyen un aporte importante en la economía nacional y que las más beneficiadas son las mujeres (18,8%) (MIFAMILIA, 2004). La misma situación se da en las encuestas de hogares de Colombia (2002), El Salvador (2001), Guatemala (2002), México (2002) y Panamá (2002).

Gráfico 6
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (6 CIUDADES): PORCENTAJE DE PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS CUYOS INGRESOS PROVIENEN DE AYUDA FAMILIAR



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de las Encuestas sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE).

Pese a lo alentador que puede ser este hallazgo, debe reconocerse que la dependencia de hijos y familiares puede afectar a la autonomía de las mujeres. Asimismo, el apoyo familiar no siempre brinda la regularidad de ingresos que es determinante para el acceso a la salud. Con frecuencia, el apoyo que reciben las mujeres proviene de los hijos, y en especial de las hijas; se observa que existe una “generación intermedia” que está aportando a su propio hogar y al bienestar de sus antecesoras.

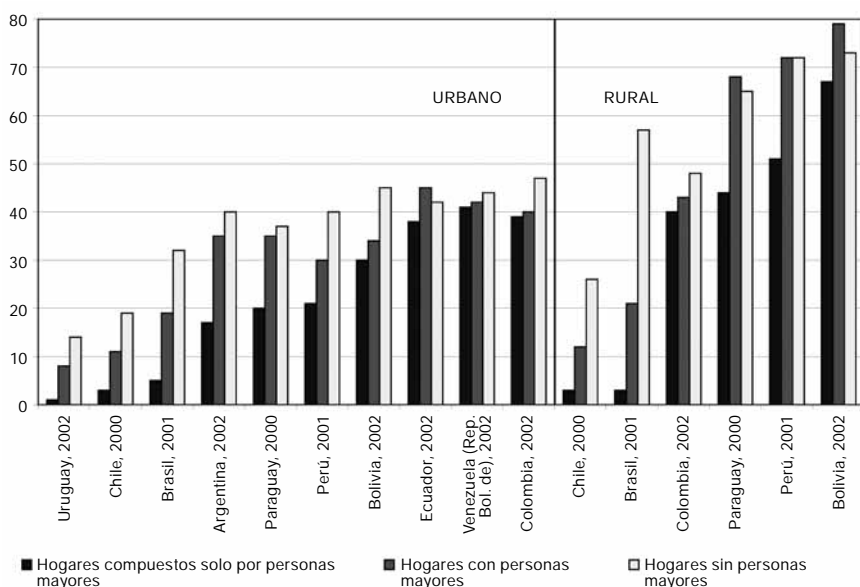
2. La incidencia de la pobreza a escala del hogar

Al analizar la posición económica de los individuos en el ámbito de los hogares es posible introducir una nueva perspectiva: el ciclo de vida de los hogares. Al igual que la familia, el hogar es un conjunto de individuos cuyos comportamientos sociales y económicos e interacción evolucionan en el tiempo de acuerdo con una serie de etapas.

Sobre la base del ciclo de vida de las familias puede construirse un modelo del ciclo de vida de los hogares, que permite prever las variables que influyen en el desarrollo de la trayectoria económica de sus miembros en cada etapa. La evolución temporal de la estructura del hogar condiciona las necesidades y comportamientos económicos de este (Pérez, 1997).

En el gráfico 7 se aprecia que en los países de América del Sur la incidencia de la pobreza es más alta en los hogares sin personas mayores que en los demás y que los hogares integrados solo por personas mayores muestran una menor incidencia de la pobreza. Este patrón es diferente en las zonas urbanas de Ecuador, donde los hogares con personas mayores acusan una mayor incidencia de la pobreza, y en las zonas rurales de Bolivia y Paraguay. En Perú, los hogares rurales con y sin personas mayores presentan una incidencia similar.

Gráfico 7
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (16 PAÍSES):
INCIDENCIA DE LA POBREZA SEGÚN TIPO DE HOGAR, 2000-2002



Fuente: José Miguel Guzmán, "La situación del envejecimiento en América del Sur en el contexto de Madrid +5 y los objetivos del Milenio", Buenos Aires, 14 al 16 de noviembre de 2005.

La menor incidencia de la pobreza en los hogares con personas mayores y en los compuestos solo por personas mayores ha sido estudiada en los países desarrollados; se ha determinado que se debe a que estos hogares se ubican en la última etapa del ciclo familiar económico (el cual se inicia en los momentos próximos a la emancipación de los hijos y culmina con la desaparición de uno de los miembros fundadores).

Durante esta etapa se producen acontecimientos de gran trascendencia económica para los hogares: los padres se acercan al momento en que sus ingresos pueden verse reducidos, en mayor o menor medida, como consecuencia de la jubilación, y los hijos dan sus primeros pasos en el proceso de inserción

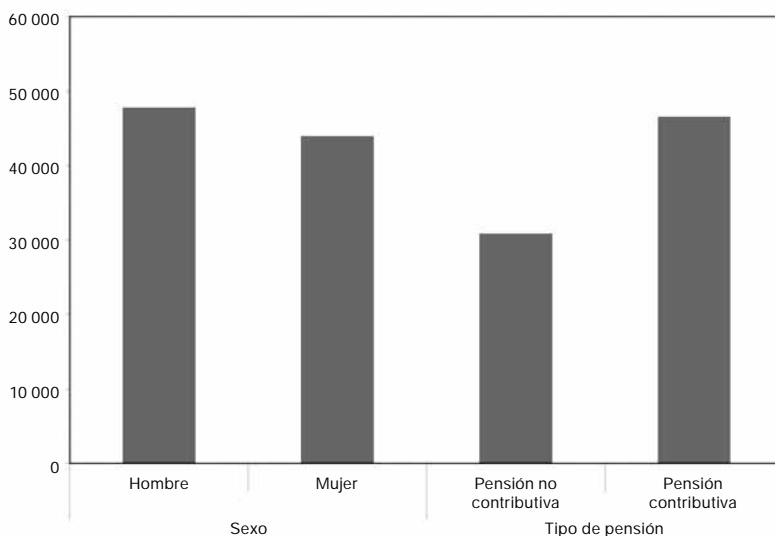
en el mercado laboral y preparan su emancipación. El patrimonio de la unidad doméstica se reparte entre dos frentes: la emancipación de los hijos, que suele absorber una parte considerable de los excedentes monetarios y patrimoniales logrados, y la intención de los padres de contar con una cierta seguridad económica tras su jubilación. Este hecho transforma las economías familiares y permite a los hijos acumular un ahorro previo para iniciar su salida del hogar paterno y, por ende, adquirir los primeros elementos de lo que será su patrimonio familiar. Sin embargo, esta ventaja para los hijos puede acarrear un costo elevado para los padres, e incluso impedir el cumplimiento de parte de sus expectativas si este fenómeno no fue suficientemente previsto (Leal y Cortés, 1993).

En síntesis, los hogares con personas mayores (incluidos los conformados solo por miembros de avanzada edad) han llegado al final de la etapa de acumulación patrimonial, por lo tanto es previsible que presenten una menor incidencia de la pobreza. Este hecho, lejos de ser un argumento para prestar menor atención a las personas mayores, significa que la inversión estatal en el grupo de edad avanzada tiene beneficios directos para las generaciones más jóvenes.

En efecto, tal como afirma Schwarz (2002), los riesgos que registran las personas mayores tienen efectos en las demás generaciones y la pobreza es un fenómeno intergeneracional, que se transmite de generación en generación (Hoskins, 2002). De este modo, si los hogares con personas mayores presentaran mayor incidencia de la pobreza, una mayor cantidad de jóvenes, miembros de sus respectivas familias, reproducirían esta situación en su ciclo de vida.

En investigaciones del Banco Mundial se ha demostrado que cuando las personas mayores ejercen control sobre sus ingresos aumenta la probabilidad de que se gaste en cubrir las necesidades del hogar, como la escolaridad y la salud de los nietos (Schwarz, 2002). En un estudio sobre el caso chileno se muestra que alrededor del 13% de las personas mayores entrevistadas tiene un familiar que depende económicamente de ellas (SENAMA, 2006). Este porcentaje aumenta en el caso de las mujeres y de las personas mayores jubiladas que reciben pensiones contributivas. El aporte mensual medio de los jubilados que reciben pensiones contributivas y ayudan a un familiar es de casi 40.000 pesos chilenos (75 dólares aproximadamente) y el de los que acceden a una pensión no contributiva de 30.000 pesos (58 dólares) (véase el gráfico 8), es decir, un poco más de las tres cuartas partes de la pensión asistencial de ancianidad, cuyo valor actual medio es de 43.000 pesos (81 dólares) mensuales.

Gráfico 8
**CHILE: PROMEDIO DEL INGRESO DE PERSONAS MAYORES DESTINADOS
 A UN FAMILIAR DEPENDIENTE SEGÚN SEXO Y TIPO DE PENSIÓN**



Fuente: Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), *Estudio para determinar canasta mínima de consumo de adultos mayores que reciben pensiones asistenciales de vejez (PASIS) o pensión mínima del INP, en la Región Metropolitana, Santiago de Chile, 2006.*

C. Políticas para mejorar la seguridad económica en la vejez: claves y opciones para la acción

Los mecanismos de provisión de seguridad económica son muchos y, en general, se complementan para ofrecer un nivel de cobertura razonable. Los fondos pueden provenir de la acumulación de ahorros durante la vida laboral en los sistemas de seguridad social, sean estos gestionados por el Estado o mediante el mercado; de la continuidad de la participación en la actividad económica (mercado laboral), y de las redes familiares o sociales (Guzmán, 2002). Estas tres fuentes son interdependientes. La generación de seguridad económica para las personas mayores es una manifestación particular del sistema constituido por el Estado, el mercado y la familia.

Las sociedades de América Latina y el Caribe están inmersas en procesos de cambios demográficos, sociales y económicos que están modificando simultáneamente la capacidad de todos los componentes de ese sistema para generar seguridad económica.

En el plano de las políticas públicas, gran parte de los países ha ejecutado políticas económicas basadas en el mercado y ha reducido significativamente la participación del Estado en la provisión de bienes. Más todavía, mediante las

reformas realizadas en los años ochenta y noventa, muchos Estados han delegado en el sector privado la producción de los beneficios de la seguridad social, reservándose la función de regulación, supervisión y garante de última instancia. Asimismo, las reformas han dado lugar a sistemas de pensiones más contributivos y menos redistributivos.

En el ámbito social se están produciendo cambios que afectan significativamente a la familia en tanto posible proveedora de seguridad económica para las personas mayores. En los tres o cuatro últimos decenios ha bajado considerablemente la fecundidad en la mayoría de los países de la región, lo cual se traduce en una disminución del tamaño potencial de la red de apoyo familiar. Además, ha aumentado la tasa de divorcios y de rupturas de los vínculos de pareja, lo cual probablemente repercutirá en la seguridad de los ingresos en la vejez de las mujeres divorciadas y separadas, en especial si no han contribuido personalmente a un programa de jubilaciones (CEPAL, 2003). Esto se agrava con el hecho de que los hombres vuelven a casarse o unirse en mayor proporción que las mujeres, con lo cual la mujer puede perder parcial o totalmente su pensión de supervivencia.

Este conjunto de cambios está poniendo en tensión los componentes del sistema proveedor de seguridad económica para las personas mayores: el Estado, el mercado y la familia. Por consiguiente las alternativas de políticas existentes se orientan a reforzar algunos de estos componentes, y todos forman parte de las agendas de los organismos internacionales que han tratado este tema.

1. Seguridad social

El acceso a la seguridad social es un derecho reconocido en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la cobertura universal de la seguridad social es un tema aún pendiente en la región, debido a razones de distinta índole. Las expresiones estadísticas de la cobertura en la vejez para la actual generación de personas mayores varían según los países.

En el debate sobre las pensiones no contributivas existen diferentes posiciones. Algunos expertos abogan por pensiones ciudadanas universales, que podrían ser financiadas por ingresos y donaciones locales o por transferencias del sistema central. Otros adhieren a las pensiones de vejez focalizadas en los sectores más pobres, y también financiadas mediante transferencias del sistema central.

Entre los ejemplos de pensiones ciudadanas universales se encuentra la pensión mensual de alimentación y medicamentos para todos los residentes de México, D.F. mayores de 70 años, instaurada en el 2001 por el Gobierno del Distrito Federal. Por su parte, el programa de pensiones rurales de Brasil es uno de los casos más destacados de la región en términos de cobertura previsional mediante mecanismos no contributivos. Aunque se vincula a un período mínimo de actividad en el sector agrícola (12 años) y se financia parcialmente con impuestos sobre la comercialización de productos agrícolas, esta iniciativa representa en la práctica

una forma de pensión no contributiva con focalización por área geográfica que ha permitido reducir enormemente la pobreza en zonas tradicionalmente rurales como el nordeste del país (CEPAL, 2006). En lo que respecta a las pensiones focalizadas, cabe citar el Programa de pensión asistencial de vejez (PASIS) de Chile, creado en virtud del decreto ley 869 de 1975 y destinado a la población mayor de 75 años carente de recursos que se encuentre marginada de la previsión. Su objetivo es garantizar un mínimo de subsistencia mediante la entrega de un subsidio pecuniario directo.

En cuanto a las pensiones contributivas, el desafío se centra en cómo lograr una adecuada cobertura de la población, sobre lo cual hay distintas posiciones. Se ha dicho que el financiamiento de las pensiones se logrará aumentando los cotizantes de la seguridad social, lo que exigiría aunar esfuerzos para promover la continuidad laboral más allá de la edad mínima de jubilación; regularizar el empleo de los inmigrantes en situación de ilegalidad; mejorar las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres, y modificar las condiciones de contratación de los jóvenes (Lorenzo, 2003). Según otro punto de vista, sería preciso aumentar la edad de jubilación, en especial en el caso de las mujeres.

2. Empleabilidad

Las tendencias generales de los indicadores laborales de las personas mayores a partir de los inicios de los años noventa en 12 países de América Latina y el Caribe muestran los siguientes hechos estilizados sobre la participación económica en la vejez: i) las tasas de participación tienden a crecer; ii) hay bajas tasas de desempleo, pero están en aumento; iii) el empleo es sobre todo en el sector informal; iv) el empleo asalariado es relativamente reducido y tiende a decrecer, y v) la jornada laboral se reduce levemente a medida que avanza en la edad (Bertranou, 2005).

Este panorama obedece, entre otras razones, a los bajos niveles de calificaciones básicas y fundamentales que tiene la población de edad avanzada, por ejemplo, los escasos niveles de alfabetización y la reducida capacidad de cálculo. La demanda de nuevas calificaciones y conocimientos pone en desventaja a muchos trabajadores de edad, cuya formación anterior ha quedado obsoleta (OIT, 2002).

Entre las intervenciones capaces de mejorar la empleabilidad de las personas mayores están la oferta de educación permanente, el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones y la creación de condiciones de trabajo seguras y adecuadas.

Se conocen actividades de este tipo en Puerto Rico, donde existe un programa de capacitación y gestión del empleo para personas de 55 años en adelante, y un banco de recursos humanos de edad avanzada para el empleo remunerado y servicios voluntarios. Algo similar se impulsa en El Salvador, donde existen programas de promoción del acceso en condiciones de igualdad al empleo,

de formación continua y de crédito para microemprendimientos comunitarios. En México, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) cuenta con un programa de capacitación para el trabajo y la ocupación del tiempo libre que incluye actividades de formación para que las personas mayores ingresen al mercado laboral y actividades de readiestramiento de los trabajadores jubilados que deseen obtener algún ingreso. En ese país también existe el programa Tercera llamada, mediante el cual las personas mayores que tienen proyectos productivos viables reciben apoyo económico de un Fondo, que agrupa a la Secretaría Nacional de Desarrollo Social, la Secretaría de Economía –a través del Fondo nacional de apoyo para las empresas de solidaridad (FONAES)– y al INAPAM (Huenchuan y Morlachetti, 2006).

3. Servicios sociales

El debate sobre los servicios sociales, está cada vez más presente en la agenda política y social. Ello no es casual, sino que se debe al reconocimiento de la importancia de la familia para mantener un determinado nivel de bienestar en la vejez. Esta contribución puede provenir de estrategias de supervivencia familiar orientadas a garantizar cierta seguridad económica y de los cuidados que se otorgan a las personas mayores cuando sus niveles de dependencia aumentan.

Los servicios sociales están estratégicamente ubicados entre el sistema formal de protección social y las redes familiares y comunitarias. Abarcan el apoyo personal y la atención domiciliaria o residencial. Su objetivo es reforzar los sistemas de apoyo familiar, para evitar los riesgos de la pobreza y la pérdida de la autonomía en la vejez.

Su fundamentación jurídica radica en los derechos sociales, que están orientados a garantizar el desarrollo de los individuos y las colectividades mediante la intervención estatal en la prestación de servicios y la distribución de bienestar (IMSERSO, 2004).

En algunos países de la región (Argentina, Costa Rica, Puerto Rico) se están creando servicios sociales. Sin embargo el tema aún no está plenamente incorporado en las políticas dirigidas a las personas mayores.

IV. Conclusiones

El estudio de la seguridad económica de las personas mayores es complejo por varias razones. Una de ellas es que, en general, la situación se analiza sobre la base a parámetros aplicables a otros grupos de edad, o como si se tratara de un grupo homogéneo, sin distinguir diferencias de ningún tipo. En este artículo se han examinado los parámetros que permiten el estudio de la seguridad económica y la pobreza en la vejez. Al respecto, cabe destacar lo siguiente:

- i) Los factores que influyen en la actual posición económica de las personas mayores son de orden individual y generacional. El grado de seguridad económica alcanzado por las actuales personas mayores es producto del diseño de los sistemas de protección social de hace tres o cuatro décadas y de las características de los mercados de trabajo en dicho período. Por lo tanto, el análisis de la capacidad de los mecanismos públicos para brindar seguridad económica a las personas mayores en el futuro debe basarse en indicadores de cobertura de los trabajadores actuales y en las nuevas condiciones que se están definiendo para acceder a los beneficios.
- ii) La pobreza es la expresión de la desigualdad al final del ciclo de vida. La incidencia de la pobreza en las personas mayores está notablemente vinculada a características estructurales de los países y al avance registrado en el conjunto de la sociedad en relación con la superación de la pobreza. En contextos poco propicios, las personas mayores se tornan particularmente vulnerables y el riesgo de caer en la pobreza puede ser más alto en este grupo etario, ya que su capacidad de generar ingresos es menor y la rentabilidad de su capital humano es comparativamente baja (Martínez, 2004).
- iii) Las fuentes de la seguridad económica derivan de la relación entre el Estado, el mercado y la familia. En el presente artículo se desea destacar la estrecha relación entre el acceso a jubilaciones y pensiones y el desarrollo de una actividad laboral en la edad avanzada. La insuficiente cobertura de la seguridad social –y la mala calidad de las pensiones– derivan en que las personas mayores se reinserten laboralmente en condiciones extremadamente precarias. Por lo tanto, en materia de políticas, garantizar a corto plazo la seguridad social para este grupo de edad es uno de los retos más complejos en términos del reforzamiento de las fuentes actuales de ingresos en la vejez.
- iv) El papel de la ayuda familiar en la seguridad económica de las personas mayores es fundamental. En la vejez, como en otras etapas del ciclo de vida, cuando una persona no logra –por razones individuales o estructurales– alcanzar una cierta seguridad económica, operan distintos mecanismos de transferencia familiar. Estas transferencias pueden darse dentro de un mismo hogar o de un hogar a otro y usualmente no ocurren en una sola dirección, sino que forman parte de un intercambio (Palma, 2001). Sin embargo, la ayuda familiar es selectiva y está siendo otorgada más a las mujeres de edad avanzada que a los hombres. Esto podría obedecer a que las mujeres mayores, al carecer de salarios formales y de transferencias del sistema de seguridad social, están siendo apoyadas

por sus familiares para evitar una fácil caída en la pobreza. Por lo tanto, en el análisis de su situación económica se debe incluir la posibilidad de contar con redes de apoyo para su subsistencia y cuidado en edades avanzadas.

- v) La pobreza entre los adultos mayores es un fenómeno extendido. Si bien en la mayoría de los países, la población mayor exhibe índices menores que los observados en la población joven, la incidencia de la pobreza en la vejez no deja de ser preocupante. En algunos países la situación se vuelve dramática: más de la mitad de la población adulta mayor vive en condiciones de pobreza. Ello revela que las condiciones de seguridad económica en la vejez continúan siendo deficientes en la región, y que se reproducen desigualdades acumuladas durante el ciclo de vida.
- vi) El ciclo económico del hogar influye en la incidencia de la pobreza en la vejez. Resulta interesante que los hogares que tienen personas mayores entre sus integrantes presentan una menor incidencia de la pobreza que aquellos sin personas mayores, hecho que responde a los patrones de acumulación patrimonial durante el ciclo de vida, expresados en activos materiales o en ingresos obtenidos a través del sistema de seguridad social. Esta acumulación patrimonial permite a otras generaciones satisfacer necesidades elementales y, a veces, contar con la función proveedora de los antecesores mientras se logran niveles autónomos de seguridad de ingresos.

Las políticas existentes para mejorar la seguridad económica en la vejez se dirigen a reforzar los mecanismos para reducir los riesgos de pobreza en la vejez. De este modo, el aumento de la cobertura de la seguridad social, las mejoras de la empleabilidad de las personas mayores y la creación de servicios sociales de apoyo a la autonomía se convierten en instrumentos de políticas clave para garantizar una buena calidad de vida en la edad avanzada. Como se dijo, la posibilidad individual de lograr seguridad económica en la vejez es limitada y, por lo tanto, las transferencias públicas –en las formas que se adopten– constituyen elementos básicos para garantizar la calidad de los últimos años del ciclo vital.

Bibliografía

- Andrews, G.R. y otros (1985), *Ageing in the Western Pacific*, Manila, Organización Mundial de la Salud.
- Arias, Claudia (2001), “Redes de apoyo social y bienestar psicológico en personas de edad”, *tesis de magister*, Mar del Plata, Universidad de Mar del Plata.
- Barrientos A. y Lloyd Sherlock P. (2003), ¿Pensiones para los pobres?, *Tercera edad y desarrollo*, N° 15, HelpAge International, diciembre.
- Barros, Carmen (1994), “Apoyo social y bienestar del adulto mayor”, *Documento Instituto de Sociología*, N° 60, Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Barquero, J. y J. Trejos (2004), “Tipos de hogar, ciclo de vida familiar y pobreza en Costa Rica 1987-2002”, *Población y salud en mesoamérica*, Revista electrónica, vol. 2, N° 1, art. 1, julio-diciembre.
- Bertranou, F. (2005), “Restricciones, problemas y dilemas de la protección social en América Latina: enfrentando los desafíos del envejecimiento y la seguridad de los ingresos”, *Revista bienestar y política social*, vol. 1, N° 1.
- Calleja, J. (1997), *Eliminación de la pobreza en la vejez*, Malta, Instituto Internacional sobre Envejecimiento.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2006), *La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad* (LC/G.2294(SES.31/3)), Santiago de Chile, marzo.
- (2003), *Las personas mayores en América Latina y el Caribe: diagnóstico sobre la situación y las políticas: síntesis* (LC/L.1973), Santiago de Chile.
- Clark, G. (2003), “Identificación de las tradiciones familiares, apoyo financiero y personal para adultos mayores, como una base para una política: resultados preliminares de un estudio en Pakistán”, *Revista de trabajo social*, N° 8, México, D.F., Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1995), “Derechos económicos, sociales y culturales de las personas de edad”, *Comentario*, N° 6, Naciones Unidas.
- Del Popolo, Fabiana (2001), “Características sociodemográficas y socioeconómicas de las personas de edad en América Latina”, *serie Población y desarrollo*, N° 19 (LC/L.1640-P/E), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), noviembre. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.01.II.G.178.
- Goldani, A.M. (2006), “Familias e envejecimiento: complejidades do ‘cuidado’”, documento presentado en la Reunión sobre indicadores para el seguimiento del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, Río de Janeiro, 24 al 26 de julio.
- Gorman, M. (1995), “La tercera edad y el desarrollo: ¿la última minoría?”, *Development in practice*, vol. 5, N° 2.
- Guzmán, José Miguel (2004), “La situación de las personas mayores en República Dominicana”, inédito.
- (2002), “Envejecimiento y desarrollo en América Latina y el Caribe”, *serie Población y desarrollo*, N° 28, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), junio. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.02.II.G.49.
- Hernández, D. (2001), “Hogares, pobreza y vejez. Desigualdad y pobreza en la población mayor”, *Demos carta demográfica sobre México*, N° 14, México, D.F., Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

- Huenchuan, Sandra (2006), "Pobreza y redes de apoyo social en la vejez. Acercamiento desde las diferencias de género", *Revista de trabajo social*, N° 12, Escuela Nacional de Trabajo Social, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- Huenchuan, S. y A. Morlachetti (2006), "Derechos sociales y envejecimiento: modalidades y perspectivas de respeto y garantía en América Latina", documento presentado en la Reunión de expertos sobre población, desigualdades y derechos humanos, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 26 y 27 de octubre.
- Hoskins, Dalmer (2002), "Prioridades del desarrollo en un mundo que está envejeciendo", *Informe del seminario realizado el 31 de octubre de 2002 en el National Press Club, Washington, D.C., Estados Unidos*, HelpAge International/National Academy of Social Insurance/Initiative for Policy Dialogue.
- Hurd, M.D. (1989), "The economics status of the elderly", *Science*, vol. 244, N° 4905.
- IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) (2004), *Libro blanco de atención a las personas en situación de dependencia en España*, Madrid.
- INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (1994), *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares*, México, D.F.
- Leal, J. y L. Cortés (1993), "La desigualdad social en España", *Informe de investigación* N° 22, Madrid, Instituto Universitario de Sociología de las Nuevas Tecnologías, Universidad Autónoma de Madrid.
- Lorenzo, L. (2003), *Consecuencias del envejecimiento de la población: el futuro de las pensiones*, Madrid, Instituto Nacional de Estadísticas.
- Maddox, G.L. y R. Campbell (1985), "Scope, concepts and methods in the study of aging", *Handbook on aging and the social sciences*, Nueva York, Academic Press.
- Martínez, Jorge (2004), "Población y pobreza", documento presentado a la Reunión de la Mesa Directiva Ampliada del Comité Especial de Población y Desarrollo del Periodo de Sesiones de la CEPAL, Santiago de Chile, 10 y 11 de marzo.
- MIFAMILIA (2004), "Diagnóstico nacional de la situación de las personas mayores", inédito.
- OIT (Organización Internacional del Trabajo) (2002), *Una sociedad inclusiva para una población que envejece: el desafío del empleo y la protección social*, documento presentado a la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, Madrid, 8 al 12 de abril.
- Palma, J. (2001), "El apoyo familiar. Transferencias de y para la población mayor dentro y fuera del hogar", *Demos carta demográfica sobre México*, N° 14, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- Pérez, L. (1997), *Las necesidades de las personas mayores*, Madrid, Ediciones Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales.
- Rico, Nieves (2003), "Los sistemas de pensiones y sus deudas con la equidad de género entre las personas adultas mayores", documento presentado en la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento: hacia una Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 19 al 21 de noviembre.
- Rodríguez, Jorge (2006), "Pobreza y población: enfoques, conceptos y vínculos con las políticas públicas con especial referencia a la experiencia y la situación en América Latina", documento presentado en la Reunión de Expertos sobre Población y Pobreza en América latina y el Caribe, Santiago de Chile, 14 y 15 de noviembre.

- Rubalcava, R. (2001), "Ingresos de las personas de edad y características de sus hogares", *Envejecimiento demográfico de México: retos y perspectivas*, México, D.F., Consejo Nacional de Población.
- Saad, Paulo (2003), "Transferencias informales de apoyo de los adultos mayores en América Latina y el Caribe: estudio comparativo de encuestas SABE", *Notas de población*, N° 77 (LC/G.2213-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), diciembre. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.03.II.G.171.
- Salles, Vania y Rodolfo Tuirán (1994), "Familia, género y pobreza", *El cotidiano*, N° 68, México, D.F.
- Sánchez, C. (1990), "Sistema de apoyo informal de viudas mayores de 60 años en Puerto Rico", *Mujeres de edad media y avanzada en América Latina y el Caribe*, Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Asociación Americana de Personas Jubiladas.
- Sánchez, P. (2000), "Sociología de la vejez versus economía de la vejez", *Papers*, vol. 61.
- Schwarz, A. (2002), "La relación entre desarrollo y protección social", *Informe del seminario realizado el 31 de octubre de 2002 en el National Press Club, Washington, D.C., Estados Unidos*, HelpAge Internacional/National Academy of Social Insurance/ Initiative for Policy Dialogue.
- SENAMA (Servicio Nacional del Adulto Mayor) (2006), *Estudio para determinar canasta mínima de consumo de adultos mayores que reciben pensiones asistenciales de vejez (PASIS) o pensión mínima del INP, en la Región Metropolitana*, Santiago de Chile.
- Tabor, S. (s/f), "Transferencias directas en efectivo", *Serie informes sobre redes de protección social*, Instituto del Banco Mundial.
- Tuirán, R. y L. Wong (1993), *Transferencias familiares de ingresos*, México, D.F., Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE), inédito.
- UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) (2002), *El estado de la población mundial*, Nueva York.
- Woolf, S. (1989), *Los pobres en la Europa moderna*, Barcelona, Editorial Crítica.
- Wong, M. y R. Espinoza (2003), "Ingreso y bienes de la población de edad media y avanzada en México", *Papeles de población*, N° 37.

Anexo

Anexo 1

AMÉRICA LATINA: PORCENTAJE DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA INDIVIDUAL POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, ALREDEDOR DE 2002

Argentina, 2002				Colombia, 2002			
Edad	Hombres (en por- centajes)	Mujeres (en por- centajes)	Ambos sexos (en por- centajes)	Edad	Hombres (en por- centajes)	Mujeres (en por- centajes)	Ambos sexos (en por- centajes)
0 a 9	64,2	65,3	64,8	0 a 9	62,9	63,5	63,2
10 a 19	59,8	57,8	58,8	10 a 19	57,9	58,9	58,4
20 a 59	37,7	40,2	39,0	20 a 59	43,6	45,7	44,7
60 a 75	29,5	28,0	28,7	60 a 75	38,7	41,9	40,4
75 y más	23,5	19,2	20,7	75 y más	40,5	38,8	39,5
Total	45,7	44,9	45,3	Total	50,5	51,4	51,0
Bolivia, 2002				Costa Rica, 2002			
Edad	Hombres (en por- centajes)	Mujeres (en por- centajes)	Ambos sexos (en por- centajes)	Edad	Hombres (en por- centajes)	Mujeres (en por- centajes)	Ambos sexos (en por- centajes)
0 a 9	72,0	71,3	71,7	0 a 9	26,9	27,8	27,4
10 a 19	66,9	63,7	65,3	10 a 19	24,1	23,4	23,7
20 a 59	54,3	56,2	55,3	20 a 59	13,6	16,6	15,2
60 a 75	55,0	52,6	53,7	60 a 75	21,6	25,3	23,5
75 y más	51,1	55,3	53,4	75 y más	33,0	29,7	31,2
Total	62,2	61,7	61,9	Total	19,5	21,0	20,3
Brasil, 2001				Ecuador, 2002			
Edad	Hombres (en por- centajes)	Mujeres (en por- centajes)	Ambos sexos (en por- centajes)	Edad	Hombres (en por- centajes)	Mujeres (en por- centajes)	Ambos sexos (en por- centajes)
0 a 9	56,3	56,7	56,5	0 a 9	62,2	61,5	61,9
10 a 19	45,5	45,6	45,5	10 a 19	52,6	53,6	53,1
20 a 59	31,1	32,2	31,7	20 a 59	40,5	43,9	42,2
60 a 75	15,1	12,8	13,9	60 a 75	40,9	44,7	42,9
75 y más	10,2	9,9	10,0	75 y más	45,2	46,7	46,0
Total	37,6	37,2	37,4	Total	48,2	49,7	48,9
Chile, 2003				El Salvador, 2001			
Edad	Hombres (en por- centajes)	Mujeres (en por- centajes)	Ambos sexos (en por- centajes)	Edad	Hombres (en por- centajes)	Mujeres (en por- centajes)	Ambos sexos (en por- centajes)
0 a 9	27,5	27,5	27,5	0 a 9	60,7	60,6	60,7
10 a 19	25,2	25,6	25,4	10 a 19	53,5	53,4	53,4
20 a 59	14,7	16,7	15,7	20 a 59	40,3	42,7	41,6
60 a 75	10,6	10,1	10,3	60 a 75	44,8	42,2	43,3
75 y más	9,5	6,8	7,9	75 y más	47,4	43,3	45,0
Total	18,4	19,0	18,7	Total	48,9	48,8	48,8

Guatemala, 2002				Paraguay, 2000			
Edad	Hombres (en por- centajes)	Mujeres (en por- centajes)	Ambos sexos (en por- centajes)	Edad	Hombres (en por- centajes)	Mujeres (en por- centajes)	Ambos sexos (en por- centajes)
0 a 9	68,0	67,6	67,8	0 a 9	72,9	70,4	71,6
10 a 19	59,0	59,2	59,1	10 a 19	68,4	63,9	66,2
20 a 59	49,6	50,7	50,1	20 a 59	52,5	53,0	52,7
60 a 75	41,5	46,0	43,8	60 a 75	53,6	47,1	50,1
75 y más	47,8	38,5	42,2	75 y más	42,3	50,4	46,9
Total	54,1	54,5	54,3	Total	61,6	59,5	60,5
Honduras, 2002				Perú, 2001			
Edad	Hombres (en por- centajes)	Mujeres (en por- centajes)	Ambos sexos (en por- centajes)	Edad	Hombres (en por- centajes)	Mujeres (en por- centajes)	Ambos sexos (en por- centajes)
0 a 9	84,2	84,4	84,3	0 a 9	67,0	66,8	66,9
10 a 19	81,0	79,0	80,0	10 a 19	62,2	60,3	61,2
20 a 59	71,2	70,4	70,8	20 a 59	47,1	47,4	47,2
60 a 75	72,4	71,3	71,8	60 a 75	42,1	41,0	41,6
75 y más	75,0	71,3	73,1	75 y más	38,8	44,0	41,7
Total	77,7	76,4	77,0	Total	54,5	53,9	54,2
México, 2002				República Bolivariana de Venezuela, 2002			
Edad	Hombres (en por- centajes)	Mujeres (en por- centajes)	Ambos sexos (en por- centajes)	Edad	Hombres (en por- centajes)	Mujeres (en por- centajes)	Ambos sexos (en por- centajes)
0 a 9	50,4	51,5	50,9	0 a 9	60,8	61,8	61,3
10 a 19	46,1	45,8	46,0	10 a 19	53,7	54,9	54,3
20 a 59	31,9	33,8	32,9	20 a 59	39,9	42,9	41,4
60 a 75	28,5	30,1	29,3	60 a 75	37,6	42,0	40,0
75 y más	36,6	33,0	34,7	75 y más	46,7	45,4	45,9
Total	39,1	39,5	39,3	Total	47,5	49,5	48,5
Nicaragua, 2001				República Dominicana, 2002			
Edad	Hombres (en por- centajes)	Mujeres (en por- centajes)	Ambos sexos (en por- centajes)	Edad	Hombres (en por- centajes)	Mujeres (en por- centajes)	Ambos sexos (en por- centajes)
0 a 9	77,8	77,7	77,7	0 a 9	55,4	56,8	56,1
10 a 19	73,1	73,1	73,1	10 a 19	49,7	50,4	50,1
20 a 59	61,6	63,2	62,4	20 a 59	33,3	41,1	37,3
60 a 75	64,3	59,5	61,7	60 a 75	41,1	49,7	45,6
75 y más	67,3	70,9	69,2	75 y más	45,3	54,5	50,3
Total	69,2	69,3	69,3	Total	42,7	47,2	44,9
Panamá, 2002				Uruguay, 2002			
Edad	Hombres (en por- centajes)	Mujeres (en por- centajes)	Ambos sexos (en por- centajes)	Edad	Hombres (en por- centajes)	Mujeres (en por- centajes)	Ambos sexos (en por- centajes)
0 a 9	46,4	46,8	46,6	0 a 9	32,8	32,4	32,6
10 a 19	39,7	39,8	39,7	10 a 19	23,2	24,1	23,6
20 a 59	26,1	28,7	27,4	20 a 59	12,6	13,0	12,8
60 a 75	25,7	26,6	26,1	60 a 75	4,3	3,5	3,9
75 y más	26,1	23,4	24,7	75 y más	2,4	2,3	2,3
Total	33,3	34,4	33,8	Total	16,3	15,3	15,8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

